

Agenda ciudadana

La nave y su hoja de ruta

Es tradicional hacer la comparación del Estado -la organización política al más alto nivel de una comunidad soberana dentro de un territorio formalmente delimitado- con una nave. En ocasión de su informe al congreso, un presidente pretendió quitarse responsabilidades por una gran crisis económica y política, declarando: “soy responsable del timón, pero no de la tormenta”. Aquí y ahora, viene al caso recuperar el tormentoso símil marítimo.

Cambiar la trayectoria de un gran navío toma tiempo y mucha energía. La inercia dificulta el viraje. Para la nave del Estado mexicano, además de las inercias sociales y culturales generadas a lo largo del siglo que el país ha vivido en el régimen que está por concluir, también cuentan las resistencias de los grandes intereses creados: las concentraciones de capital, los sindicatos, el crimen organizado, la partidocracia, etc. Esas resistencias pueden ser un factor tan o más importante que las inercias en las dificultades propias del cambio de rumbo. Finalmente, algunos de los grupos que inicialmente apoyaron y proveyeron la energía para el cambio, una vez que se inició como resultado de la elección del 1° de julio, han empezado a formular demandas contradictorias y que incluso chocan con las decisiones de quien tiene la responsabilidad última de manejar la transformación.

Como los tres factores mencionados -inercias, oposición de los favorecidos en el viejo orden y contradicciones en la heterogénea coalición triunfante-, operan al mismo tiempo, eso lleva a que el esfuerzo por modificar la naturaleza del sistema de poder se convierta en una tarea en extremo delicada.

En El Príncipe, (1531), Nicolás Maquiavelo advirtió que en política no había empresa más complicada para el gobernante que aquella que buscaba introducir nuevas reglas (leyes) en el ejercicio del poder, pues los beneficiados por el antiguo arreglo se tornarían en opositores feroces y una parte de los que apoyaron la empresa del nuevo gobernante, se mudarán en descontentos y quizá en adversarios, al advertir que no se les concede lo que esperaban lograr tras el triunfo, (capítulos III y VI).

Pero suponiendo que la clase política que hoy está a punto de asumir el control del aparato de gobierno de nuestro país pueda vencer inercias, sabotajes y armoni-

De ser certero el diagnóstico de Calvillo, entonces la gran tarea del nuevo gobierno y de la parte activa de la sociedad, además de intentar buscar un significado a nuestra existencia en medio del caos de una modernidad avasalladora y brutalmente sometida a los valores del mercado, es usar la energía y el poder político ganado en las movilizaciones y las urnas, para recuperar el sentido profundo de la vida en común, de la polis, es decir, de ese “habitar juntos” que implica el término que nos legaron los griegos. En el pasado inmediato, las grandes ideologías que surgieron a la par de la revolución industrial, la democracia liberal y el socialismo, fueron hasta no hace mucho la carta de navegación de los sistemas políticos.

zar los intereses encontrados de sus apoyos, entonces su reto de fondo debe ser este: ¿hacia dónde puede y debe dirigir al país? En un libro de ensayos que acaba de publicar Tomás Calvillo -El rapto de la interioridad, (México: El Colegio de San Luis, 2018)- el autor, historiador y poeta, considera que el México actual es ya una sociedad sumida en un caos producto de un círculo vicioso de impotencia e impunidad, (p. 31). Es más, según su evaluación, la comunidad de los mexicanos ha dejado de ser una auténtica comunidad nacional porque ha perdido esos “horizontes en común” que alguna vez tuvo, no obstante, sus nunca superadas desigualdades históricas, (p. 59).

De ser certero el diagnóstico de Calvillo, entonces la gran tarea del nuevo gobierno y de la parte activa de la sociedad, además de intentar buscar un significado a nuestra existencia en medio del caos de una modernidad avasalladora y brutalmente sometida a los valores del mercado, es usar la energía y el poder político ganado en las movilizaciones y las urnas, para recuperar el sentido profundo de la vida en común, de la polis, es decir, de ese “habitar juntos” que implica el término que nos legaron los griegos.

En el pasado inmediato, las grandes ideologías que surgieron a la par de la revolución industrial, la democracia liberal y el socialismo, fueron hasta no hace mucho la carta de navegación de los sistemas políticos. Sin embargo, el ideario socialista encarnó en un “socialismo real” que, finalmente, se hundió con el fracaso soviético al finalizar el siglo pasado. Fue entonces que uno de los teóricos de la democracia liberal, Francis Fukuyama, consideró que ésta había llegado a su meta y era ya el único futuro posible (El fin de la historia y el último hombre, Planeta, 1992). Sin embargo, con el neoliberalismo desbocado y su empeño en poner fin al “Estado benefactor” para favorecer abiertamente una muy antidemocrática concentración del poder y la riqueza, la “democracia real” al estilo de la que hoy domina en Estados Unidos -white nationalism- y amenaza con expandirse, ya no tiene respuesta para el ciudadano promedio de un país como el nuestro, ni el de otros.

Ante la ausencia de las grandes utopías del pasado, hoy y aquí, además de esforzarnos por poner fin a las herencias nocivas de lo que en semanas será un antiguo régimen -desigualdad, violencia fuera de control y corrupción de todo el aparato institucional- es indispensable darse a la tarea de elaborar nuestra propia hoja de ruta, una visión de futuro colectivo aceptable, sino para todos, sí para la mayoría.

Se trata de generar una utopía, aunque sea modesta, pero surgida de nuestra historia. Alguna vez, cuando aún estaba viva, la Revolución Mexicana fue esa utopía, pero se fue apagando hasta morir a finales del siglo pasado y dejó un gran vacío en la imaginación colectiva. Y es claro que un Estado nacional no tiene gran futuro si carece de un proyecto colectivo que sea su marco moral y cuente con el respaldo y compromiso de una mayoría.

Luis Rubio

Jesús Cantú

¿Cuál fue el error?

Los mexicanos estamos hartos de la violencia, las matanzas, la extorsión, los secuestros, la falta de seguridad y la displicencia que al respecto manifiesta la autoridad. En eso hay un consenso casi absoluto y universal. Donde se divide -y polariza- la opinión es en qué hacer al respecto y, sobre todo, si Felipe Calderón cometió un error al atacar las bandas del crimen organizado. Para algunos, el verdadero problema fue creer que la inseguridad es un problema: hubiera sido mejor, dicen, negociar la paz con los criminales, dejarles su espacio y, con eso, vivir en paz. Es decir, en esta lógica, el error fue “pegarle al avispero” porque eso provocó la violencia.

Detrás de la discusión sobre la seguridad pública yacen dos asuntos que con frecuencia se mezclan pero que son distintos: por un lado, la función del gobierno en materia de seguridad y, por otro, la estrategia que debe o puede seguirse para lograrla. O sea, lo primero es el objetivo al que debemos aspirar y lo segundo es cómo avanzar en esa dirección. Aunque la disputa respecto a la seguridad se centra en lo segundo, la realidad es que lo importante es lo primero. Quienes perciben que el problema fue “pegarle al avispero” no comprenden que fue la naturaleza del régimen político lo que hizo posible la paz en el pasado, además de que desprecian el pánico en que vive la ciudadanía.

Hay una enorme dosis de nostalgia en la noción de que se puede retornar a esa era mítica de paz y tranquilidad que funcionaba porque el gobierno “negociaba” con los criminales. Esa nostalgia, que alimenta el discurso de AMLO y ha sido la guía de acción del gobierno actual, parte de una premisa errónea: que la paz y estabilidad que efectivamente existía en los cincuenta o sesenta era producto de un sistema de seguridad efectivo, cuando en realidad la paz y seguridad que México vivió por algunas décadas fue más producto de controles autoritarios que de un sistema de seguridad sostenible. En pocas palabras, a menos que alguien crea que es deseable, o posible, reconstruir los cincuenta, no hay a dónde regresar.

Si uno acepta que la función nodal de la existencia de un gobierno es la seguridad pública, entonces el gobierno mexicano (a todos niveles) ha sido un fracaso. En lugar de dedicarse a construir el andamiaje necesario para que la ciudadanía goce de tranquilidad en su vida cotidiana y la certeza de que sus familiares no serán vejados, robados, secuestrados, extorsionados o asesinados, el gobierno ha abdicado de su responsabilidad: construye discursos e insulta a los críticos pero no resuelve el problema. Lo peor de todo es que ni siquiera reconoce que existe un problema.

Es en este contexto que debe evaluarse el actuar de Felipe Calderón en materia de seguridad. El gran mérito de Calderón fue que reconoció que el gobierno es responsable de la seguridad pública. Cualesquiera que hayan sido sus errores -de estrategia o de implementación- nada le resta el mérito de haber aceptado que el gobierno es responsable de la paz entre los ciudadanos. Esto no es algo menor.

Su estrategia, en esencia, consistió en construir una policía federal que se dedicaría a confrontar a las organizaciones criminales. Hay tres tipos de críticos

Más allá de lo que se haya hecho o dejado de hacer en materia de seguridad en las décadas que siguieron al declive del autoritarismo, estamos muy lejos de llegar a un consenso sobre la naturaleza del problema, lo que nutre los mitos y prejuicios que pululan la discusión sobre lo que debe hacer el próximo gobierno.

a lo que hizo: unos, los ya mencionados, no ven un problema y creen que Calderón lo creó y por eso es responsable de la ola de muertes de la última década. La paradoja de esa crítica es que la ola de muertes comenzó a declinar al final de su sexenio, sugiriendo que al menos algo bueno estaba ocurriendo. La segunda crítica es que debió haber atacado las fuentes de dinero más que a los narcos mismos, o sea, un asunto de estrategia. Finalmente, el tercer grupo argumenta que todo se concentró en atacar a la criminalidad y no en construir la base de un nuevo sistema de seguridad.

Los expertos evaluarán las críticas, pero no hay duda que el legado relevante de Calderón es el haber reconocido la responsabilidad del Estado en esta materia. El reto ahora es construir un nuevo sistema de seguridad*.

Más allá de lo que se haya hecho o dejado de hacer en materia de seguridad en las décadas que siguieron al declive del autoritarismo, estamos muy lejos de llegar a un consenso sobre la naturaleza del problema, lo que nutre los mitos y prejuicios que pululan la discusión sobre lo que debe hacer el próximo gobierno. Muchos de los planteamientos existentes, desde el mando único hasta la legislación en materia de seguridad interior, responden a intereses o situaciones particulares que nada tienen que ver con el temor que aqueja a buena parte de la ciudadanía. El resultado es que tenemos una policía federal desquiciada y desanimada y ninguna visión o estrategia para construir seguridad de abajo hacia arriba, además de que quien ha sido responsable de la poca paz que hay -el ejército- está bajo ataque.

La falacia de los nostálgicos radica en su suposición de que la seguridad se puede imponer cuando en realidad se tiene que construir. Y esa construcción debe ser de abajo hacia arriba, con todo el apoyo de la policía federal y del ejército. Es decir, esas fuerzas deben enfocarse a hacer posible la construcción de capacidades policíacas y judiciales locales. Todo el resto es demagogia.

*<http://consejomexicano.org/?s=seccion&id=50>

@lrubiof

ÁTICO

La inseguridad aqueja a todos y los políticos no se ponen de acuerdo ni siquiera en su responsabilidad, mucho menos en la solución.

Evidente complicidad con el crimen organizado

La libertad y el cinismo con el que opera el crimen organizado únicamente pueden darse en función de una fuerte complicidad con altas autoridades gubernamentales, pues sin ella tendrían que actuar con sigilo y discreción, como sucedía hace no mucho tiempo.

Los ejemplos de esto son múltiples, pero basta con dos en condiciones totalmente diferentes para dejar claro el cinismo con el que actúan, casi como desafiando a la autoridad para que intente frenarlos y detenerlos, como debería de ser dada la gravedad de los ilícitos que están cometiendo.

A principios de septiembre del presente año, viajeros que regresaban de Laredo, Texas denunciaron que en plena zona urbana, unos metros después de cruzar los puentes internacionales sobre el Río Bravo, al tomar el Bulevar Luis Donald Colosio para evitar el tráfico urbano e incorporarse a la carretera rumbo a Monterrey, eran detenidos por vehículos con delincuentes a bordo que les solicitaban un pago de 350 dólares para dejarles continuar su camino; si cumplían con la demanda les compartían una palabra clave que debían decir si eran detenidos más adelante al continuar su trayecto rumbo al interior del territorio nacional.

Sin justificar que estos hechos sucedan en las carreteras del país, hay que reconocer que es más difícil controlar lo que sucede a lo largo de una vía que tiene varios centenares de kilómetros, a lo largo de los cuales se encuentran varios tramos sin ningún poblado; pero que suceda en plena zona urbana y a la luz del día, en una avenida que tiene cuando mucho unos cuantos kilómetros de extensión, es verdaderamente un desafío a la autoridad.

Tras varias semanas de atracos, la autoridad finalmente tomó cartas en el asunto y de acuerdo a una publicación en el periódico regional El Norte, el pasado viernes la Policía Estatal de Tamaulipas emitió un comunicado, acompañado de dos videos de un minuto, en el que anuncia que de las 6 a las 19 horas, implementarán caravanas de vehículos que transiten de Nuevo Laredo hacia Monterrey, protegidas por patrullas para protegerlos de los delincuentes.

La reacción debe ser efectiva para evitar este tipo de atracos; pero no combate el fondo del problema, pues no hay ningún tipo de castigo para los delincuentes, que seguramente lo único que realizarán es cambiar sus operaciones a otras avenidas.

Otro hecho ocurrido esta misma semana, fue evidenciado durante el recorrido que cuatro futuros secretarios de estado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, realizaron por las zonas afectadas por las labores de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), en alguno de los puntos del recorrido, al situarse en lo alto de una colina, divisaron un grupo de pipas que cargaban combustible directamente de una toma clandestina que habían realizado a un ducto que pasaba por esa zona.

Los delincuentes, en lugar de huir o disminuir la extracción ilegal del combustible, lo que hicieron fue accionar repetidamente sus armas de alto calibre para amedrentar a las personas que osaban acercarse a la zona en que ellos cometían sus tropelías. Los guías de los futuros secretarios, les comentaron que la forma de operar de los llamados “huachicoleros”

Los ejemplos de esto son múltiples, pero basta con dos en condiciones totalmente diferentes para dejar claro el cinismo con el que actúan, casi como desafiando a la autoridad para que intente frenarlos y detenerlos, como debería de ser dada la gravedad de los ilícitos que están cometiendo.

era precisamente esa: cuando percibían que personas ajenas a ellos se aproximaban a su zona de operación, disparaban de inmediato estas ráfagas al aire, para obligarlos a retirarse.

Los huachicoleros tuvieron conocimiento previo de que los futuros integrantes del gabinete federal harían un recorrido por la región, con lo cual si tuvieran el mínimo temor de las acciones legales que se pudieran tomar si los descubrían, podían haber suspendido sus actividades durante algunas horas; pero no seguros de la protección de la que gozan, simplemente continuaron sus actividades como si nada sucediera, incluyendo su reacción ante la aparición de extraños.

Por supuesto que están muy bien identificadas las zonas donde más se roban combustible de los ductos; pero en este caso las autoridades ni siquiera implementan operativos para evitarlo, simplemente “hacen como que las vírgen les habla” y los dejan operar con toda libertad. Los lugareños que tienen contacto con los huachicoleros, afirman que los militares responsables de la zona militar correspondiente, ya tienen su cuota por cada pipa que extraen. Es decir, de acuerdo a estas versiones las autoridades son los que les cobran a los delincuentes por dejarlos operar libremente su “negocio”.

Dos hechos, con actividades y circunstancias muy diversas, pero que revelan la muy evidente complicidad entre los delincuentes y las autoridades responsables de hacer prevalecer la vigencia de la ley; en los dos casos, realmente los delincuentes son los que operan el “negocio” y les entregan un porcentaje (establecido en una cuota fija con algún tipo de medida -en el caso del huachicol es por tanque; seguramente en el caso del cobro de “derecho de paso” (por llamarlo de alguna manera) será por día o por hora trabajada) de sus ganancias a las diversas autoridades.

Aunque esto no es tan claro, seguramente las distintas autoridades tienen un acuerdo tácito para repartirse dichos cobros dependiendo de las competencias: en el caso del robo de combustible, es el ejército; en el caso de las carreteras, será la Policía Federal; en el de las ciudades, la estatal; etc. de tal manera que (igual que los cárteles: se reparten el territorio y el negocio) no duplican cobros ni tienen disputas entre ellos.

Bajo esta lógica autoridades y delincuentes en realidad son socios, que obtienen pingües ganancias de estas actividades. Y, muy probablemente, en algunos casos también comparten con otras autoridades superiores. Una sociedad para atracar a la ciudadanía.